



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-010-2019-00598-01
Demandante:	Beatriz Helena Vásquez Bedoya
Demandado:	Colpensiones y Colfondos S.A.
Asunto:	Apelación y Consulta
Procedencia:	Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

**Medellín, junio veinticuatro (24 ) de dos mil veintidós (2022)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, en ausencia justificada VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de Consulta en favor de dicha entidad en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el 2 de mayo del año 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora BEATRIZ HELENA VASQUEZ BEDOYA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COLPENSIONES y de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, radicado 05001-31-05-010-2019-00598-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La señora BEATRIZ HELENA VASQUEZ BEDOYA, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, se condene a Colpensiones a recibir de Colfondos S.A., todas y cada una de las cotizaciones realizadas, con la indexación pertinente e intereses de mora.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, que la señora Beatriz Helena Vásquez Bedoya, ha cotizado en toda su vida laboral 1371,43 semanas, que cotizó inicialmente al ISS y posteriormente se trasladó a Colfondos S.A., traslado que obedeció a la mala y deficiente asesoría por los promotores del fondo privado, omitiéndose el deber de información.

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que es cierto lo relacionado con la afiliación de la demandante al ISS y el traslado efectuado con destino a Colfondos S.A., no constándole los demás hechos por cuanto los mismos escapan del conocimiento de la entidad.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir; buena fe; prescripción; inexistencia de la nulidad de traslado de régimen pensional; inexistencia de la obligación de reconocer la

afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva; innominada o genérica e imposibilidad de condena en costas.

Por su parte, **COLFONDOS S.A.**, se allanó a la demanda y manifestó no oponerse a las pretensiones, con excepción a la condena en costas.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 2 de mayo del año 2022, el Juzgado de conocimiento que lo fue el Décimo Laboral del Circuito de Medellín, declaró la ineficacia del traslado de régimen efectuado por la demandante el 29 de febrero de 1996; condenó a Colfondos S.A., a trasladar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual de la actora con sus correspondientes rendimientos, los bonos pensionales si los hubiere, el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional y reaseguro, debidamente indexados; condenó a Colpensiones a recibir de Colfondos S.A., los valores aludidos e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral de la demandante, igualmente, condenó a Colpensiones a pagar a la demandante la pensión de vejez a partir del momento en que se acredite el retiro del sistema, prestación que deberá ser liquidada con base en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993; absolvió a las demandadas de las demás pretensiones y no impuso costas en la instancia.

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

#### **Colpensiones**

El apoderado de la entidad interpuso recurso de apelación, señalando que no se encontró afectación al acto de traslado de la demandante, la voluntad de

permanencia en el RAIS se reafirmó con el gran número de semanas cotizadas después de la afiliación, que nunca ejerció o buscó asesoría para su traslado al RPM cuando contó con dicha posibilidad y está en todas sus capacidades.

Asimismo, solicitó con base en las sentencias SL 4360 de 2019 y SL 4989 de 2018, en las que se ordenó reintegrar la totalidad de las cotizaciones, como lo mencionó el a quo, se adicione la sentencia, en el sentido que, si la sumatoria de los conceptos que se ordenen trasladar, resultare inferior al valor total del aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubieren generado de haber permanecido la afiliación en el Régimen de Prima Media, sea Colfondos S.A. quien asuma la diferencia que resulte, y solicita que a Colpensiones no se le condene en costas, toda vez que fue llamada como un tercero a recibir y mediante la apelación se busca una adición a la sentencia buscando un derecho que Colpensiones tiene en lo relativo al principio de la estabilidad financiera.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de la parte actora y la apoderada de Colpensiones. La vocera judicial de la demandante refirió que ha quedado claro, que regresar a Colpensiones depende de que en el juicio resulte probado que la decisión de traslado tomada por el afiliado no fue informada en razón a que no recibió la asesoría en los términos que el reglamento exige, siendo el fondo de pensiones quien debe probar que su ofreció esa asesoría tal y como lo ha señalado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, situación que no quedó acreditada, por lo que solicita se confirme la sentencia de primera instancia.

El procurador judicial de la entidad pública accionada reiteró los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de alzada, tendientes a la no acreditación por la parte actora de situación alguna que invalide el traslado,

adicionando que no puede asignarse toda la carga probatoria a los fondos de pensiones, ni considerarse al afiliado como la parte débil de la relación procesal, reforzando la solicitud de adición del fallo de primera instancia en aras de la no afectación del principio de sostenibilidad financiera del sistema.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

### **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora BEATRIZ HELENA VASQUEZ BEDOYA nació el 05 de febrero de 1962, tal y como se dejó consignado en los formularios de

vinculación al ISS y a Colfondos S.A., obrantes a folio 34 y 5 del anexo 02 del expediente digital.

- Que la actora se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Colfondos S.A. el 29 de febrero de 1996, de conformidad con el formulario de afiliación visible a folio 51 del anexo 02 del expediente digital.

- Que la accionante acredita un total de 1371.43 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral expedida por la Colfondos S.A., obrante a folio 42 del anexo 02 del expediente digital.

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala si:

¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y de consulta, proferida en el presente proceso por el señor Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin, si es ineficaz la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por Colfondos S.A., efectuado por la demandante y las consecuencias del mismo?

¿Si es procedente adicionar el fallo de primera instancia, en el sentido de ordenar a Colfondos S.A., asuma el pago de la diferencia que pudiere resultar entre los aportes y dineros que dicha entidad traslade a Colpensiones y los que se hubieren generado de permanecer la afiliación en el Régimen de Prima Media?

¿Si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez por parte de Colpensiones?

### **2.4.- TESIS**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual i) es ineficaz el acto de afiliación por incumplimiento del deber de información y por lo tanto debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante, ii) la actora acredita los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez y iii) no hay lugar a imponer obligaciones adicionales a cargo de Colfondos S.A., en consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA.

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la Ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el

capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”*.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”* (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.



Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020 y más recientemente en las sentencias SL SL1442 del 21 de abril de 2021, SL3349 del 07 de julio de 2021 y SL 637 del 11 de mayo de 2022.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el caso concreto, se establece que la señora BEATRIZ HELENA VASQUEZ BEDOYA, se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Colfondos S.A. el 29 de febrero de 1996 de conformidad con el formulario de afiliación obrante a folios 51 del anexo 02 del expediente digital, no obstante, dicho formulario de afiliación no dan cuenta de la información que fue brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se suple con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); por ello no puede inferirse la voluntariedad de la afiliación en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Del interrogatorio de parte practicado a la demandante, no se deriva prueba de confesión, en tanto que la misma indicó que en 1996 más o menos, tuvo una asesoría corta de parte de Colfondos S.A., donde le informaron que tendría unos beneficios si pasaba a la entidad, no le hablaron de su situación pensional al momento de la asesoría y que no le hablaron del derecho de retracto.

Se sigue de lo anterior, que el traslado de la actora se efectuó sin que la misma hubiera recibido información adecuada, esto es, sin conocer las características, funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, consecuencias del traslado, ni las desventajas de dicho régimen pensional, conforme a las exigencias legales vigentes para 1996, por lo que no le asiste razón al apoderado de Colpensiones cuando en primer lugar señala que el acto de afiliación es válido y en segundo lugar cuando en sus alegatos refiere al cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes para la fecha del traslado.

Aunado a ello, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que en su momento Colfondos S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones de su afiliación, más si se tiene presente que Colfondos S.A., se allanó a las pretensiones y no ejerció ninguna acción de defensa, bajo dicho escenario probatorio, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación.

### **Sobre los efectos de la ineficacia**

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la

cotización en favor de la administradora accionada, teniendo en cuenta, que fue Colfondos S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información y siendo ésta, la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la pretensora, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció la Sala de Casación

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL2877 del 29 de julio de 2020 y SL 3034 de 2021, última en la cual sobre el punto se indicó:

*“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.*

Adicional a lo expuesto y atendiendo, a que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de las cuotas de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia que debe reintegrar la AFP es un efecto propio de la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones, se encuentra acertada la decisión de la a quo, imponiéndose en esta instancia la confirmación del fallo.

En virtud de lo anterior, se concluye que se encuentra ajustada la decisión de primera instancia y que la misma guarda armonía con las sentencias SL 4360 de 2019 y SL 4989 de 2018, referenciadas por el recurrente, de ahí que no hay lugar a la adición solicitada por el apoderado de Colpensiones, pues no se puede imponer cargas adicionales a Colfondos S.A., habida cuenta que con la orden impuesta de trasladar aportes, rendimientos, comisiones de administración, seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión

mínima, los tres últimos indexados, se está garantizando que Colpensiones reciba todos los valores que la misma hubiere recibido, en el evento en el que la accionante, siempre hubiere estado afiliada a esa entidad.

### **Pensión de vejez**

En cuanto a este problema jurídico, de manera previa acota la Sala que si bien en el escrito de demanda inicial se solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, en virtud de los requisitos que fueron exigidos por el despacho al disponer la devolución de la demanda, la activa desistió de dicha pretensión, de ahí que en la audiencia celebrada el 23 de junio de 2021, el funcionario de primer grado no incluyó en el objeto del litigio la discusión en relación al derecho a la prestación económica de vejez, en tal sentido, no fue acertado que en la audiencia celebrada el pasado 2 de mayo de 2021, el juez adicionara la fijación del litigio, cuando ya esa etapa había precluido desde el 23 de junio de 2021, a fin de incluir como punto a debatir el derecho a la pensión de vejez, sin embargo, se tiene que frente a dicha situación ninguna de las partes efectuó reparo alguno.

Dicho lo anterior, se tiene que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición pensional, tal y como lo señaló el a quo, toda vez que, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 32 años de edad, puesto que nació el 5 de febrero de 1962, sin contar tampoco con los 15 años de cotizaciones al 1° de abril de 1994.

Así las cosas, la norma a aplicar es el artículo 9 de la Ley 797 del 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, debiendo contar la demandante con 57 años y con 1300 semanas, bajo ese norte, de la prueba documental obrante en el plenario, encuentra la Sala que la demandante cuenta con 1371.43 semanas cotizadas en toda su vida laboral, tal y como se desprende de la historia laboral expedida por Colfondos S.A., por lo tanto, la misma supera ampliamente el requisito de las 1300 semanas de cotizaciones mínimas

exigidas, sin desconocer que en la actualidad continua cotizando y que la historia a la que se hace referencia fue aportada en el año 2019, y en cuanto a la edad requerida, la misma arribó a los 57 años de edad el 5 de febrero del año 2019, por lo que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, siendo claro que el disfrute de la prestación esta supeditado al retiro del sistema, situación que no se ha presentado, por lo que resulta ajustada la orden emitida en la sentencia consultada y apelada, quedando a cargo de Colpensiones efectuar la liquidación correspondiente.

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones, por la no prosperidad del recurso de alzada, se fija como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral de Circuito de Medellín, el 2 de mayo de 2022, en el proceso ordinario instaurado por la señora BEATRIZ HELENA VASQUEZ BEDOYA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

2.- **COSTAS** en esta instancia a cargo de Colpensiones, se fija como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

**JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES**  
En ausencia justificada

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**